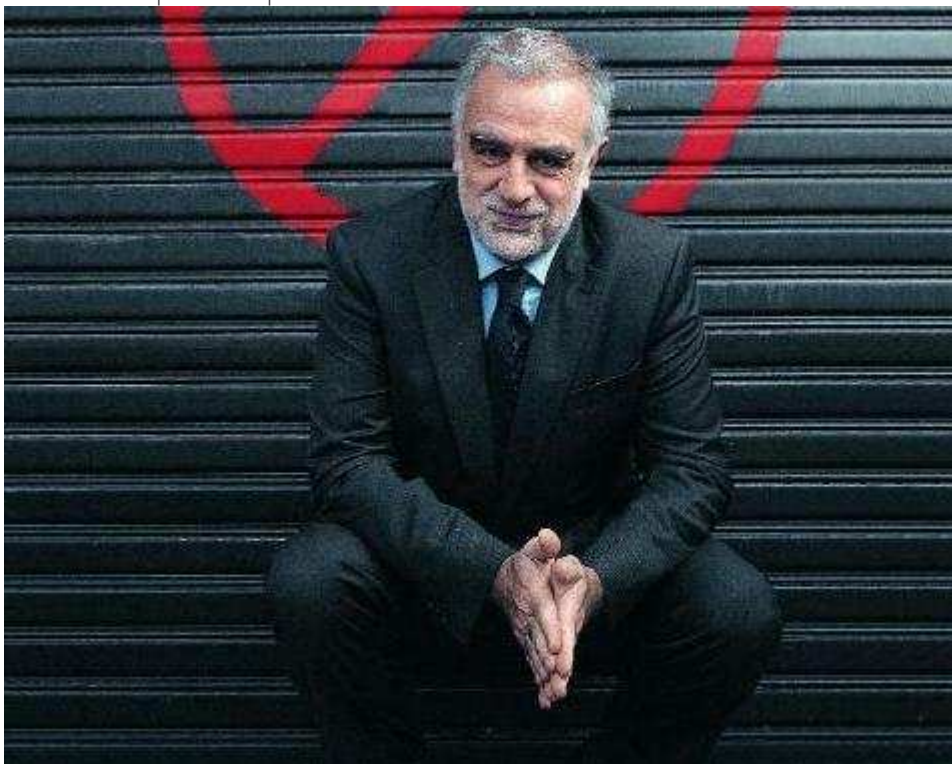


Buenos Aires, jueves 04 de agosto de 2011

[Veintitrés](#) [Veintitrés Internacional](#)

El hombre que sienta al poder en el banquillo

31.07.2011 | 22.38 |



Veintitrés Internacional

Entrevistas / Luis Moreno Ocampo, fiscal de la Corte Penal Internacional. Gracias a un ordenamiento legal incipiente y complejo, un argentino persigue los crímenes aberrantes cometidos por los hombres más poderosos desde la impunidad que se otorgan al frente de sus respectivos gobiernos. Las dificultades y los logros de una de las iniciativas más ambiciosas del siglo XXI.

Por Deborah Maniowicz

Al norte de África, las revoluciones en Yemen, Túnez y Egipto lograron derrocar a sus líderes dictatoriales y apuestan a modificar el mapa del mundo árabe. Cuando el dominio alcanzó a Libia, Muammar Khadafi se mostró intocable y aún se niega a abandonar Trípoli, la ciudad desde donde comanda el país desde la primavera de 1969. Sin embargo, después de dos meses de investigación, el fiscal argentino de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, logró demostrar sus crímenes y hoy lo acusa de cometer delitos de lesa humanidad.

En este escenario, cuando se le pregunta a Moreno Ocampo por la forma de enfrentar la violencia en el siglo XXI, sintetiza: “Europa y Sudamérica están estabilizadas pero en África todavía hay líderes que quieren utilizar la violencia masiva para continuar en el

poder. Por eso Muammar Khadafi y Omar Hassan al-Bashir son mis mayores clientes. El mundo parece caótico pero evoluciona. Es un cambio de cinco mil años de cultura mundial”. Lo afirma desde su rol como fiscal, desde hace ocho años en la CPI, pero también desde su experiencia en el histórico Juicio a las Juntas, su militancia en Transparencia Internacional y la fundación de Poder Ciudadano.

–El año que viene concluye su mandato. ¿Qué balance hace? ¿Cómo fue trabajar en un organismo tan nuevo?

–Cuando yo llegué no había nada. Tenía seis pisos vacíos con dos empleados y el desafío era enorme. Había que inventar todo y en ese sentido la experiencia argentina era muy útil. Fue fascinante armar la institución judicial, resolver los problemas técnicos y diseñar la forma de investigar crímenes masivos. Esto sumado a la dificultad de conseguir apoyo de los líderes políticos porque, como cualquier otra corte en el mundo, nosotros no tenemos policía propia y la policía de cada país tiene que obedecer lo que la Corte decide y a veces no es fácil. Hay mucho trabajo. Hay semanas que duermo en un avión cuatro días. Me convertí en un nómada. El desafío era tan grande que no podíamos fracasar y creo que no fracasamos.

–¿El apoyo de los gobiernos fue en aumento?

–Es complicado. La Corte está consolidada y a medida que pasa el tiempo las reglas de juego que impone se hacen más serias y más duras. La Corte obliga a los gobiernos a tomar decisiones que no siempre quieren. La universalidad del organismo va venir o no, depende de cómo esta idea funcione. Los países de Europa y Sudamérica están todos y del África no árabe está un 70 por ciento. Con la “primavera árabe” la gente pide que actúe la CPI. De hecho Túnez, que empezó la revolución, acaba de ratificar su pertinencia a la Corte y Egipto promete que lo va a hacer en el corto plazo.

–Pero al margen de los países del Magreb aún continúan ausentes países poderosos como China, Rusia y Estados Unidos.

–Bueno, pero eso es lo fascinante de ese modelo. Las Naciones Unidas fueron creadas por los países grandes y por eso inclusive se quedaron con poder de veto. Acá no hay poder de veto para nadie y son todos iguales.

–En la Corte no hay poder de veto, es cierto. Sin embargo la independencia es relativa porque el Art. 16 de su estatuto establece que el Consejo de Seguridad de la ONU puede frenar las investigaciones en cualquier momento.

–En realidad lo que es interesante es que nunca se utilizó. Por ejemplo Al-Bashir consiguió que la Unión Africana pida por él pero nunca le dieron el Art. 16. El concepto es una especie de puente con el sistema de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es el organismo que controla la seguridad en el mundo y por eso tiene la posibilidad de detener una investigación. Es una forma de conectar la justicia y la seguridad. Cómo lo usen es un tema discrecional. El espacio político lo llenan los políticos, en este caso el Consejo de Seguridad, y el judicial lo llenamos nosotros. Eso muestra que el mundo todavía tiene dobles estándares. Por ejemplo mucha gente pide que Siria se envíe a la Corte y el Consejo todavía no lo envía.

–¿Cómo evolucionó en estos ocho años el vínculo con el Consejo de Seguridad?

–Cuando me nombraron fiscal estaba como profesor visitante en Harvard y un colega me advirtió que no tome el cargo, que iba a ser una vergüenza para mi carrera porque iba a estar nueve años sin hacer nada. Él decía que sin Estados Unidos no iba a poder investigar, ni arrestar. Y justamente el desafío fue armarlo bien para poder actuar en los casos donde había que operar. Cuando yo empecé era claro que el Consejo de Seguridad nunca nos iba a dar un caso. Sin embargo, dos años después nos dio Darfur con 11 votos contra 4 abstenciones y después de tres meses de debate. En febrero de este año nos dio Libia con un día de debate y 15 votos positivos. Unanimidad, consenso.

–Congo, Kenya, Sudán, Libia, República de África Central son los únicos casos en trámite ante la Corte, ¿por qué sólo se investiga a los países africanos?

–Porque en África todavía hay crímenes masivos. En los últimos años el continente cambió enormemente y aún está cambiando pero todavía hay líderes que se mantienen en el poder matando. La campaña que iniciamos en África la iniciamos con Al-Bashir y de hecho el líder de la Unión Africana era nada menos que Khadafi. Hace un tiempo un presidente africano me dijo: “Mire, fiscal, en la UA hay unos diez presidente que lo odian”. Y a mí me puso contento porque de la Unión no espero muchos elogios pero sí cooperación. Sobre el resto de los países donde se cometen crímenes y no actuamos, la realidad es que no soy el fiscal del mundo. Hay una justicia que funciona de manera más o menos clara en 116 países que son los miembros de la Corte. Ahí yo soy independiente y puedo aplicar las reglas. Fuera de estos países hay otros 77 que no son miembros y donde puede haber crímenes similares pero donde no podemos actuar a menos que el Consejo de Seguridad nos lo indique. Cuando los Estados no son parte del tratado no se puede intervenir. En el mundo árabe nos preguntan por qué no nos metemos en Palestina, en Estados Unidos nos dicen cómo se les ocurre meterse en Afganistán. Cada país tiene su visión. La Corte es una institución muy nueva pero que viene creciendo. Es una comunidad distinta a cualquier otra, unida por valores. Parecida a Facebook. La gente dice que FB es un milagro por cómo se desarrolló. Tiene unas 800 millones de personas unidas por alguna idea. Y FB nació en Harvard en 2003, el mismo año que la CPI, donde viven 2.800 millones de personas bajo un régimen de protección internacional. Es decir, la Corte fue tres veces más rápida que FB en armar la comunidad.

–En un artículo que publicó hace dos años en esta revista, usted dijo que “está en juego una definición sobre la forma de enfrentar la violencia en el siglo XXI”.

–Y lo sigo sosteniendo. El desafío de la Corte es diseñar las reglas que intenta aplicar. Reglas que básicamente dicen que no se puede usar violencia masiva en el ejercicio del poder. En la Argentina en la década del '70 era posible matar enemigos como parte del juego político. Se justificaba. A Rucci porque era un traidor, a este porque era comunista, a este porque era sindicalista y a este porque era empresario. Y eso se acabó. Lo que ocurre con la Corte es que hay dos regiones que están estabilizadas en violencia: una es Europa, que cuando hubo un brote violento en la ex Yugoslavia se movilizó y armó un tribunal para que investigue, y la otra es Sudamérica, donde el único país que todavía tiene violencia masiva, aunque esta va declinando, es Colombia. Cuando hubo un conflicto entre Colombia, Ecuador y Venezuela, que fue lo peor que pasó en América latina en términos de violencia en los últimos años, toda la región intervino

para controlar la situación y obligar a Hugo Chávez y Álvaro Uribe a bajar los decibeles. Existe un equilibrio regional de que hay cosas que no pueden ocurrir. Eso pasa en Europa y en América latina. En África no es tan claro. Todavía hay líderes que quieren utilizar la violencia masiva. Por eso Muammar Khadafi y Omar Hassan al-Bashir (N. de la R.: actual presidente de Sudán. Está acusado por la CPI de crímenes de guerra y contra la humanidad) son mis mayores clientes. El mundo parece caótico pero evoluciona. Es un cambio de cinco mil años de cultura mundial. En mi discurso inaugural dije que el mejor resultado de la Corte sería que no hubiera casos porque eso significaba que no había genocidios o que existía un sistema nacional que los castigaba. Eso es lo que tiene que ser porque si los crímenes los comete la gente que tiene poder y sabe que si los comete va a tener un problema con la Corte y va a perder el poder, entonces no los va a cometer. Esta Corte no puede detener todos los crímenes del mundo pero puede detener los crímenes cometidos desde el poder, que son los crímenes más graves.

—¿Por qué luego de ocho años de existencia de la Corte aún no hay condenas? ¿No es esto en violación del principio de juicio expeditivo reconocido por el propio estatuto del organismo?

—El 21 de agosto tenemos los alegatos finales del caso Thomas Lubanga, jefe de una milicia del este del Congo acusado de utilizar niños soldados.

—Insisto, aún no hay condenas.

—La condena depende de los jueces. Antes de que termine mi mandato va a haber dos casos cerrados. No es poco. Estamos hablando de crímenes masivos, miles de personas muertas, torturadas, secuestradas, violadas. Tenemos que proteger a todos los testigos y a todos los investigadores. Normalmente se hablan varios idiomas y eso también atrasa los tiempos. Todo es complicado. Hay una especie de expectativa enorme, que está muy bien, pero es imposible complacer.

—¿Por qué los tribunales ad hoc de Yugoslavia y Ruanda, que investigan crímenes de similares características, pudieron investigar y juzgar tantos casos?

—Empezaron hace 18 años y en el mismo período tampoco tiene condenas. Además, desde la fiscalía solamente investigamos a los máximos responsables mientras que en el tribunal de Yugoslavia investigaron a todo el mundo. Allí los primeros casos fueron de sargentos, de gente de bajo nivel. Nosotros empezamos con el tope. Todos los que están presos en la fiscalía son número uno o dos. Pienso que estamos bien de tiempo, que actuamos rápido. El juicio debe ser verdadero y con garantías y eso genera demoras porque los acusados tienen la posibilidad de defenderse. Y sobre todo, los casos tienen que impactar al resto de la humanidad. El caso de Thomas Lubanga sobre niños soldados tiene que ser una especie de luz roja. Justamente una parte de nuestro trabajo es ver cómo potenciamos el impacto de nuestros casos alrededor del mundo. La representante especial de Bank Ki-moon en temas de niños soldados decía que en Nepal desmovilizaron a tres mil niños por el caso Lubanga y eso que Nepal ni siquiera es Estado parte. El impacto de la Corte hay que medirlo por si los crímenes en el mundo decrecen o no. Nosotros estamos midiendo eso pero necesitamos el consenso de los demás actores. Cuando hay consenso las cosas cambian. En Libia investigamos en dos meses. Velocidad del rayo. Pero teníamos consenso absoluto de todo el mundo.

–A diferencia de los crímenes masivos que investigó en la Argentina ahora investiga crímenes con los sospechosos en el ejercicio de sus cargos. ¿Cuándo se obtienen mejores resultados?

–Las diferencias son enormes porque es mucho más riesgoso tomar testimonios a las víctimas y acusados cuando los criminales tienen poder. Pero el impacto también es mayor porque el objetivo es detener los crímenes. El día que Khadafi esté preso va a ser más fácil investigarlo. El poder en el mundo de hoy exige legitimidad y la Corte afecta esa legitimidad y a la gente que tiene poder, por eso es objeto de tantas presiones.

–¿Qué sensación tuvo cuando vio sentado en la misma mesa a Al-Bashir y a Ban Ki-moon?

–Acá hay un problema porque el gobierno de Al-Bashir lleva 19 años en el poder y 19 años haciendo guerras. Cuando se armó la rebelión en Darfur, en la región del oeste, simplemente atacó a los ciudadanos. Rodeó las ciudades, violó mujeres, les robó todo y las echó. Desplazó cuatro millones de personas, desplazó Córdoba y Santa Fe juntas, enteras. Se aplicó la famosa frase de Mao que había dicho que el guerrillero debe moverse como un pez en el agua. Entonces necesitaban distinguir quién era el pez y quién era el agua. En la Argentina se torturó para saber quiénes eran guerrilleros y quiénes no y en Darfur lo que hicieron fue más simple: se echó a todos los ciudadanos, se tiró toda el agua. Cuando hay un soldado de una milicia guerrillera en una ciudad, la ciudad se convierte en un blanco. Cuando sacamos la orden de arresto contra Al-Bashir, él usó la orden para amenazar diciendo que iba a hacer lo mismo en el sur. Ahora el mundo está pagando el precio de ignorar lo que pasa en Darfur para lograr que en el sur no pase lo mismo.

–Pero la orden de arresto es previa a que el Secretario General se reuniera con Al-Bashir.

–La relación con Al-Bashir se debe básicamente a que el mundo intentaba asegurar que no se iba a iniciar de nuevo una guerra con el sur. Él estaba tratando de asegurar que en el sur no pase lo que ocurrió en Darfur. Ahora los líderes del mundo están tratando de evitar verse con Al-Bashir porque está marginado y su detención es cuestión de tiempo. La corte de Yugoslavia hace poco arrestó a Ratko Mladic y pasaron 15 años. El destino de Al-Bashir es enfrentar la justicia, el problema es que sus víctimas no tienen tiempo porque hoy se mueren de hambre y están siendo violadas. Hay dos millones de personas viviendo en campos para refugiados en condiciones de genocidio.

–¿Cómo es investigar a líderes de la talla de Al-Bashir y Khadafi?

–Vivo con seguridad y se acrecienta cuando viajo pero para mí es normal. Cuando trabajaba en el Juicio de las Juntas vivía en esta misma casa y enfrente estaba la escuela de inteligencia del Ejército. Todos los días me cruzaba con 80 oficiales. Eso pasó hace 26 años. Me acostumbré a esta vida.

–¿Cómo se compone su equipo de trabajo?

–Tengo 300 personas trabajando conmigo de 80 países. Diversidad brutal. Y diversidad

también en la disciplinas. Tengo un área con diplomáticos y expertos en relaciones internacionales; un área de investigaciones compuesto por policías, gente que viene de ONGs y expertos en ciencias forenses, y el área de los abogados que van a juicio, donde trabajan unas 40 personas. Integramos estas áreas en equipos de trabajo para cada caso. Al principio se peleaban todo el tiempo pero ahora establecimos reglas y un mandato de operaciones.

–¿A quiénes consulta cuando tiene dudas?

–Tengo seis asesores que cubren todas las áreas.

–¿Por qué no hizo mayor uso de la posibilidad de abrir investigaciones motu proprio? (El estatuto de la Corte permite abrir investigaciones por resolución de la ONU, a pedido del Estado, o por propia voluntad del fiscal.)

–Desde Westfalia las relaciones internacionales son relaciones entre Estados. La revolución de la Corte Penal fue que el fiscal y los jueces tienen autoridad de actores internacionales y esto era impensado. Es importante que la fiscalía tenga independencia para actuar pero lo que nosotros hicimos fue desarrollar una política donde antes de actuar avisamos. Nos ponemos en el borde del parque del líder político y le decimos: “¿Nos invita a entrar?”. Si no, tenemos que entrar igual, pero si me invitan mejor. Eso hicimos con Congo y Uganda y nos invitaron. En Kenia, en cambio, el presidente dijo: “Mire, fiscal, yo no lo puedo invitar porque usted tiene que investigar a mi gente, pero si usted lo hace yo lo voy a apoyar”. Y entonces de ese modo logramos mantener independencia pero promover cooperación. Es difícil pero creo que lo logramos.

–Pero usted podría abrir una investigación por motu proprio y luego buscar cooperación.

–Sí, pero es más difícil. Cuando invito no pierdo independencia sino que gano eficiencia. Si yo hubiera estado todos estos años haciendo investigaciones que nadie pudiera cumplir hubiera destruido la organización. Nuestro desafío es ser operativos e independientes.

–¿Cree que va a tener aplicación la definición del crimen de agresión adoptada en la Conferencia de Kampala?

–Bueno, el 17 se van a reunir de nuevo para ver si la aplican o no. Yo no me meto en nada que no es lo mismo. Soy fiscal. No defino la ley, la aplico.

–¿Cómo influyen los avances tecnológicos en su labor diaria?

–Las nuevas tecnologías afectan a la gente. La distancia en el tiempo y el espacio reduce nuestra capacidad moral. La cuestión es que las nuevas tecnologías las utilizan tanto los ciudadanos como quienes denuncian delitos, como ocurrió en Siria y en Túnez, y los gobiernos que quieren cometerlos, como ocurrió en Libia donde Khadafi mandaba mensajes amenazando a la gente. Y también lo utilizamos nosotros ya que nos llegan videos y mails por Internet todo el tiempo.

–¿Provoca un aumento en el anonimato de las fuentes?

–El problema es que nosotros no podemos utilizar información anónima. Casi no podemos utilizar fotos y videos que nos manden por Internet porque nunca podés estar seguro de hasta qué punto son auténticas. Es interesante porque nos amplía la visión pero no aumenta las pruebas. A diferencia de un periodista, nosotros tenemos que demostrar la autenticidad.

–¿Le sorprendieron las revoluciones en el Magreb?

–No. Me parece fascinante lo que está pasando en el mundo árabe. Es una especie de reclamo de cambio, no sólo a los líderes árabes sino a los líderes mundiales. Uno de los problemas del mundo actual es que antes era suficiente decir basta y pedir que se cambien las reglas, ahora hay que establecerlas y eso es raro. Los movimientos sociales no están acostumbrados a establecer las reglas, están acostumbrados a cambiarlas. Y hay que ver como se arma todo. Ese es el desafío del mundo de hoy.

–¿Cómo sigue el proceso en Libia? ¿Tienen pensado investigar a los integrantes del Consejo Nacional de Transición?

–No. Los crímenes más graves los cometió Khadafi. Es muy interesante porque de acuerdo al sistema legal de Libia, Khadafi no tiene ningún cargo. Como guía de revolución, lo que él diga es obligatorio para todas las instituciones. El Congreso de Libia tiene que aceptar lo que él diga y si le pide al Banco Central que le dé dos mil millones se los tiene que dar. No es robo, es legal. Y como es un país comunista maneja todas las empresas. Khadafi es el dueño de todo poder en Libia. Vamos a ver si investigamos a otra gente pero creemos que el caso que presentamos es el caso que debería ser. Incluye a Khadafi; su hijo segundo, Saif al Islam, y el jefe de inteligencia militar, Adulá al Senussi, que es su cuñado. Ahora estamos investigando las violaciones, estamos viendo si podemos tener pruebas de Khadafi mismo solicitándolas. En Libia es muy vergonzoso exponerse públicamente por ser violada, entonces estamos viendo si podemos exponer casos sin mostrar mujeres violadas. Estamos viendo si podemos mostrar prisioneros o documentos que prueben la compra de productos tipo viagra. Un testigo nos acercó la información de que como Khadafi quería humillar a los rebeldes ordenó violar a sus mujeres. Es muy posible que podamos agregar esos cargos. Vamos a ver también si iniciamos cargos contra personas que hoy internacionalmente lo ayudan a cometer los crímenes.

–Le cambio de tema, ¿qué opinión le merece la suspensión de Baltasar Garzón?

–Ahora Garzón está trabajando en la OEA para un programa de Colombia y estuvo trabajando conmigo unos meses en la investigación de un grupo que había participando del genocidio de Ruanda y que ahora estaba en el Congo. Teníamos el dato de que el secretario ejecutivo de FDLF (Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda), Callixte Mbarushimana, vivía en París y supuestamente no tenía vínculo con los crímenes y sin embargo era la cara de estos. Parecido a lo que pasó con Batasuna en la ETA. Por eso quería a tener a Garzón en mi equipo.

–¿Por qué para la Justicia española los crímenes del franquismo no son delitos de lesa humanidad?

–No sé. No puedo opinar de casos que no son míos.

–Garzón es reconocido como el único juez que pidió la captura de Bin Laden, llevo a la prisión al dictador chileno Augusto Pinochet y se opuso fervientemente a la invasión de Irak, entre otros logros. ¿Qué representa para la Justicia internacional la suspensión de un juez de sus características?

–Bueno, muestra que es complicado proteger a los jueces. Garzón es el juez más conocido del mundo hispanoparlante y sin embargo lo suspendieron. Cuando uno investiga gente con poder, sabe que corre el riesgo de ser atacado. Su suspensión muestra que no se puede esperar que los jueces y los fiscales hagan todo. Que no podemos tener solamente héroes, que hace falta una sociedad que tenga reglas de juego claras y que las cumpla. Me acuerdo que hace unos diez años tuvimos una cena en la casa de Garzón, en España, con él y el fiscal italiano Gerardo Colombo, que hizo los Mani Pulite, y charlamos de lo que era investigar gente con poder. Llegamos a la conclusión de que antes perseguíamos dirigentes políticos que se escapaban por una escalera, nosotros los perseguíamos y en el hall estaba lleno de gente que nos aplaudía. Diez años después los líderes siguen escapándose por la escalera pero estamos en el piso 49, en el hall no queda nadie y hay francotiradores que nos disparan. Aplicar la ley no puede ser una tarea solitaria. En países como Suecia las reglas no son del juez sino de la sociedad. Es como un partido de fútbol: si los jugadores son muy violentos, el réferi no los va a poder controlar. Necesitás un buen juez pero también futbolistas que jueguen al fútbol. Esa es mi visión. El año que viene vendrá un nuevo fiscal con otra mirada. Una cosa que me gusta de irme es que la Corte sigue. Creo que hay que irse para que venga otro y otro.

–¿Lo mismo piensa de los gobiernos?

–Por supuesto.

–Se lo pregunto porque en América latina es muy común la reelección de los mandatarios.

–Yo diría que básicamente en Sudamérica hay un problema de armar instituciones que funcionen. Dependemos de líderes y eso no está nada bien.

–¿Cómo ve los avances en materia de derechos humanos en la Argentina a partir del kirchnerismo?

–En el rubro de derechos humanos, la Argentina tiene algo que ofrecer. Juan Méndez, que fue el primer preso argentino por el que Amnistía Internacional hizo una campaña, es actualmente el asesor del secretario de Naciones Unidas en materia de torturas. Santiago Cantón es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y hay varios argentinos más en puestos similares. La Argentina desarrolló un know-how en este tema. Es fascinante el despegue que tuvo la Argentina, el mal aterrizaje con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y el despegue siguiente. Muestra que el tema no se agota. Yo creo que mi nombramiento es un reconocimiento a la Argentina que hizo las cosas bien.

–En 1992 usted dijo que “los argentinos entendimos bien lo que pasó en la dictadura,

pero aún tenemos que aprender cómo funcionar en democracia”. ¿Avanzamos en la senda democrática?

–Los últimos ocho años yo vivo en Holanda y casi no sigo lo que pasa en Argentina. No me ocupo de nada de lo que pasa acá. No me corresponde hacer ningún análisis, pero la Argentina tiene un problema de violencia, un problema de crimen ordinario y no sabe manejarlo. Yo me acuerdo de Juan Ángel Pirker, que era un comisario general de la época de Alfonsín que fue un tipo muy original, muy honesto y cuando se murió hubo un entierro enorme para él. Me acuerdo que una vez le comenté el problema de que había ejecuciones ilegales en la policía y él me dijo: “Ese es el problema del que más nos habla la gente pero el 5 por ciento es como usted, se fija en que matamos a muchos y el 95 por ciento se queja porque son pocos”. Los problemas de violencia son complejos pero no se van a resolver fuera de la ley. La Argentina resolvió el problema de la violencia política pero el problema de la violencia ordinaria todavía es complicado. Creo que el mundo va a resolver el problema de violencia masiva, los genocidios, pero no está para nada encaminado a resolver el problema del crimen organizado. Mientras la policía va en carreta el crimen organizado va en avión supersónico. No creo que haga falta una corte mundial pero sí investigaciones más regionales y globales. Justamente, el crimen organizado utiliza las fronteras geográficas para protegerse y todavía no hemos desarrollado mecanismos aptos para combatirlo. La paz no es un lujo, es una necesidad. Tenemos que trabajar para lograrla.

–Usted termina su mandato en 2012, ¿podría ser esa un área de trabajo?

–Todavía no sé qué voy a hacer. Yo estaba en Harvard cuando la CPI me convocó y ahora me están ofreciendo que vuelva a dar clases. Creo que debería tratar de clarificar lo que hicimos. La ley no es sólo para los jueces y fiscales sino también para la gente como mi mamá, entonces hay que explicar lo que hicimos. Tenemos que empezar a entender cómo funciona la ley en el mundo. Yo por ocho años estuve aplicándola y creo que debería trabajar en tratar de explicar los hechos y ver cómo los profesores en las universidades pueden explicar esto. Necesitamos diplomáticos que entiendan cómo funciona el globo. El mundo diplomático sigue viviendo en Westfalia y hay que estar en el siglo XXI. Eso es lo que debo hacer. No va a haber un cargo más interesante que este. Pensé lo mismo cuando estuve en el Juicio de las Juntas pero en realidad fue un entrenamiento para esto.